



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL N° 1

FSM 15036/2022/4/CA4, Incidente N° 4 - DENUNCIADO:
CAPSEG S.R.L. Y OTRO s/INCONSTITUCIONALIDAD,
(Juzgado Federal N°2, Secretaría N°8, de Morón).
Registro de Cámara: 14.626

San Martín, 18 de diciembre de 2025.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Llegan las presentes actuaciones a estudio del Tribunal, en virtud del recurso de apelación presentado por la defensa de Antonio Bobadilla, contra las resoluciones dictadas el 16 de mayo del cte. año en los incidentes FSM 15036/2022/3 y /4 y en el legajo FSM 1305/2024/1/1, que no hicieron lugar al planteo de inconstitucionalidad del decreto reglamentario 773/24, ni a la extinción de la acción penal de los delitos investigados en los expedientes señalados, hoy acumulados en la causa FSM 15036/2022, ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón.

Atento la similitud de los temas tratados en las distintas incidencias y que la parte solicita la imputación de los mismos bienes exteriorizados para la extinción de la totalidad de los delitos objeto de esta causa, comprensiva de la FSM 1305/2024, ha de analizarse lo requerido en un solo pronunciamiento, dejándose constancia en los restantes.

II. Al momento de interponer el remedio procesal contra las distintas resoluciones, el recurrente centró sus agravios -principalmente- en considerar que existió una errónea interpretación de la ley 27.743, la que se realizó de manera restrictiva, excluyendo supuestos no previstos en la ley, desnaturalizando de ese modo la finalidad del régimen.

En esa línea, entendió que -respecto de los hechos de evasión imputados- se ha tenido en cuenta el decreto 773/2024 que calificó de inconstitucional, por ampliar las exclusiones de la ley, contradiciendo de ese modo el principio de legalidad penal y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Coparonni".

Fecha de firma: 18/12/2025

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA ALEJANDRA LORENZ, PROSECRETARIO DE CAMARA



#39661410#485286450#20251218130505236

Asimismo, señaló que la resolución efectuó una distinción entre la pretensión de regularizar el producto de un delito y la posibilidad que brinda la ley de liberarse de una causa penal, a través de la declaración de un activo oculto relacionado con la investigación. Sobre el punto, destacó que el Alto Tribunal, en el fallo citado, analizó el sistema del impuesto al valor agregado, admitiendo que se considere tanto el débito omitido como el crédito inexistente, concluyendo que, en ambos casos, se genera ahorro, es decir un activo regularizable por el blanqueo.

En relación a la resolución dictada en el incidente de inconstitucionalidad, requirió su nulidad, por entender que no contiene la opinión del magistrado, sino que constituye una transcripción de los argumentos del fiscal.

III. En primer término, han de descartarse los planteos nulificantes efectuados por el quejoso, basados en la receptación por parte de la judicatura de la posición del Ministerio Público Fiscal.

Sobre el particular, es doctrina del Alto Tribunal, que el hecho de haberse remitido la sentencia apelada a los fundamentos del dictamen del fiscal, no descalifica al pronunciamiento como acto judicial (Fallos: 319:308, 296:512, 535; 291:188; 268:247; 269:43, entre muchos otros).

En base a ello, menos aún puede entenderse nulo aquel que compartiendo los argumentos desarrollados por ese Ministerio, los reprodujo.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL N° 1

FSM 15036/2022/4/CA4, Incidente N° 4 - DENUNCIADO:
CAPSEG S.R.L. Y OTRO s/INCONSTITUCIONALIDAD,
(Juzgado Federal N°2, Secretaría N°8, de Morón).
Registro de Cámara: 14.626

IV. Sentado ello, corresponde aclarar también que la defensa, al momento de informar en sede judicial la exteriorización de activos, requirió, en ambos procesos, se declare la inconstitucionalidad del decreto 773/2024.

Tal como se desprende del dictamen fiscal en el incidente FSM 15036/2022/4, como por los argumentos del apelante en esta instancia, esa declaración aparece vinculada exclusivamente a los hechos de evasión investigados originalmente en el legajo FSM 1305/2024, toda vez que son los referidos al uso de facturas falsas. Sin embargo, habiéndose acumulado ambos procesos, más allá de resultar inoficioso su tratamiento respecto de la investigación sobre los hechos de simulación dolosa de pago, recibirá tratamiento en la presente resolución.

Cabe recordar, en forma liminar, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional, por lo que no corresponde formularla sino cuando un acabado examen conduzca a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o garantías invocados (Fallos: 319:3148; 328:4542; 329:5567; 330:855; 331:2799, entre muchos otros).

La Corte ha considerado desde sus inicios, que es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber de los tribunales de justicia de examinar las normas en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta y abstenerse de aplicarla, si las encuentran en oposición a



ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial y una de las mayores garantías

con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos (Fallos: 33:162).

Ahora bien, para llegar a la delicada conclusión declarativa pretendida por la defensa, debe producirse una grave confrontación de la norma con el texto constitucional. A ello, cabe agregar que el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, ha establecido que el interesado debe demostrar claramente la inconstitucionalidad invocada, no siendo suficiente su mera alegación, ya que la declaración propiciada no debe hacerse en términos genéricos o teóricos. No basta, en consecuencia, con la aserción de que la norma causa agravio constitucional, sino que debe afirmarse y probarse, que ello ocurre en el caso (Fallos: 256:602; 258:255; y 307:1656; entre otros), debiendo acreditar también en qué medida la inconstitucionalidad alegada le causa un perjuicio a su defensa en juicio (Fallos: 314:407; y 315:952).

Sentado ello, se desprende del Art. 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, que el Poder Ejecutivo tiene dentro de sus atribuciones, la de expedir "las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de la leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias"; es decir, la finalidad de esa potestad es asegurar una aplicación efectiva de la ley, proveyendo instrucciones de carácter técnico o procedimental pero sin alterar el contenido sustancial del sistema legal.

Fecha de firma: 18/12/2025

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA ALEJANDRA LORENZ, PROSECRETARIO DE CAMARA



#39661410#485286450#20251218130505236



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL N° 1

FSM 15036/2022/4/CA4, Incidente N° 4 - DENUNCIADO:
CAPSEG S.R.L. Y OTRO s/INCONSTITUCIONALIDAD,
(Juzgado Federal N°2, Secretaría N°8, de Morón).
Registro de Cámara: 14.626

A los fines de analizar la consonancia de una reglamentación con la Carta Magna, debe tenerse presente no sólo que haya emanado del órgano habilitado y se haya observado el procedimiento correspondiente, sino también que ello ocurra respetando el sentido esencial de la norma (Fallos: 344:3476). Es que, si bien el Alto Tribunal ha reconocido al Poder Ejecutivo que la atribución prevista en el Art. 99, Inc. 2°, le permite establecer condiciones, requisitos, limitaciones o distinciones que no haya contemplado el legislador expresamente, estos deben ajustarse al espíritu de la norma reglamentada (Fallos: 325:645; 326:3521; 330:2255; 335:146; 337:149 entre otras). En este sentido, afirmó que las reglamentaciones se encuentran sujetas a limitaciones, como ser, "la imposibilidad de alterar el contenido de la ley, estableciendo excepciones, obligaciones, cargas, sanciones o deberes no previstos por el legislador, pues supondría asignar subrepticamente facultades legislativas al Poder Ejecutivo, violando el principio de la división de poderes" (Fallos: 347:1403).

La ley 27.743 establece dos regímenes diversos: uno de regularización de obligaciones tributarias aduaneras y de la seguridad social y otro de regularización de activos.

El capítulo VI denominado "Efectos de la regularización", en su artículo 34, inciso b) sostiene: "Quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren en el presente régimen, en las rentas que estos hubieran generado



y en los fondos que se hubieran usado para su adquisición, así como el cobro y la liquidación de las divisas provenientes de la Regularización de Activos de dichos bienes, créditos y tenencias.”; como se observa, la ley no efectúa distinción alguna respecto de los delitos tributarios ni de su modalidad de comisión.

Refuerza la conclusión de que el legislador ha decidido tomar una posición de mayor laxitud sobre los ilícitos previstos en el Régimen Penal Tributario, al momento de establecer la aplicación de la ley, si se repara en la lectura de las exclusiones contempladas en el Art. 41, ya que al referirse a quienes estuvieran procesados por los ilícitos enumerados en el artículo 6° de la ley 25.246 eliminó, específicamente, los previstos en el inciso k de esa norma, es decir, a los delitos del título IX de la ley 27.430 y a la que en un futuro la reemplace.

Por otro lado, en la discusión parlamentaria, no se observa ninguna referencia a limitar determinadas formas de comisión de los delitos tributarios cuya acción penal podría quedar extinguida a través de la adhesión a alguno de los regímenes que se estaban tratando.

Sentado ello, tal como señalara la defensa, el Art. 3 del decreto 773/24 estableció, en lo que aquí interesa, que: “No se encuentran alcanzados por la liberación a la que se refiere el párrafo precedente el gasto computado en el impuesto a las ganancias, el impuesto a las salidas no documentadas y el crédito fiscal del impuesto al valor agregado, provenientes de facturas consideradas apócrifas por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP)”;

es decir, generó por vía de reglamentación una exclusión no





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL N° 1

FSM 15036/2022/4/CA4, Incidente N° 4 - DENUNCIADO:
CAPSEG S.R.L. Y OTRO s/INCONSTITUCIONALIDAD,
(Juzgado Federal N°2, Secretaría N°8, de Morón).

Registro de Cámara: 14.626

prevista por la ley, limitando el alcance del régimen, desviando el espíritu de la norma y, por lo tanto, extralimitándose en la atribución concedida por el Art. 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional.

Así las cosas, no ha de considerarse, en el caso, por inconstitucional, la limitación impuesta por dicha norma al momento de evaluar las consecuencias de la exteriorización efectuada por el imputado, analizándose conforme la letra de la ley en su artículo.

V. Ahora, corresponde analizar la solicitud de extinción de la acción penal efectuada por la defensa.

En primer lugar, cabe destacar que no se encuentra controvertido el efectivo acogimiento al Régimen de Regularización de Activos previsto en el Título II de la Ley 27.743 "Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes".

De las constancias de la causa se desprende que el contribuyente expresó su voluntad de acogerse al régimen, presentando en tiempo y forma los formularios correspondientes. De las capturas de pantalla acompañadas por ARCA -DEO incorporado el 16-4-2025-, se desprende que lo vinculó a la causa penal 1305/2024, hoy acumulada a la presente (ver F. 3321 -Régimen de Regularización de Activos- Detalles -).

El régimen de exteriorización de la ley estableció que los sujetos que adhieran quedarían librados de las acciones penales tributarias que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren -Art. 34, inciso b-.



De este modo, se dispuso una amnistía cuya finalidad no se basó en consagrar un perdón incondicional, sino uno con efectos limitados y condicionados, exigiendo una relación directa, objetiva y verificable entre los activos exteriorizados y la conducta penal investigada.

La medida liberatoria, asimilada a la extinción prevista del Art. 59 del Código Penal, opera como un instrumento de regularización, por lo cual la exteriorización no puede ser ajena al objeto procesal; por el contrario, debe vincularse al perjuicio fiscal concreto que generó la imputación. En este sentido se ha expedido la Cámara Federal de Casación Penal al interpretar la ley 27.613, conceptos que el legislador ha dejado de manera clara y explícita en la ley en trato en estos autos (Confr. CFCP Sala 4 FSA 1965/2020, Rta. 12-06-2025 Reg.: 628/2025).

Llegado el momento de evaluar si corresponde la liberación, en este caso en particular, ha de tenerse en cuenta el dinero en efectivo y el inmueble adherido al régimen.

En este último, si bien no se desprende con claridad el momento en que se efectuó la entrega de dinero, ha de tomarse la interpretación más favorable al imputado, pudiéndose apreciar que habría adquirido la propiedad que se escrituró el 10 de diciembre de 2016, en cumplimiento de un boleto firmado el 6 de octubre de 2014, habiéndose dejado constancia de que la vendedora había recibido, antes de ese acto, el dinero en efectivo correspondiente a la transacción.

Así, puede atribuirse que parte de las compensaciones efectuadas en el año 2016 y las evasiones de IVA y Ganancias de ese mismo período, generaron "el ahorro" utilizado en esa compra.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL N° 1

FSM 15036/2022/4/CA4, Incidente N° 4 - DENUNCIADO:
CAPSEG S.R.L. Y OTRO s/INCONSTITUCIONALIDAD,
(Juzgado Federal N°2, Secretaría N°8, de Morón).
Registro de Cámara: 14.626

Por otro lado, en relación al otro activo en análisis, tratándose de dinero en efectivo, la manifestación realizada por el imputado sobre la vinculación con los hechos investigados resulta, en este caso en particular, suficiente para considerarlos con origen en los hechos imputados, ya que constituía una tenencia que se habría podido realizar con el producto de los montos presuntamente evadido con anterioridad.

Así, los montos constitutivos de delito, considerandos conforme las pautas de cambio establecidos en la legislación pertinente, aparecen proporcionales a la exteriorización efectuada, tomando como principio rector la interpretación *favor rei*.

Esta interpretación se realiza teniendo en cuenta que, en este tipo de leyes de amnistía, el legislador ha privilegiado, durante su período de aplicación, el interés del Estado en la incorporación al circuito legal de bienes ocultos de los contribuyentes, sobre aquel que protege la norma penal (confr. en igual sentido Cámara Penal Económico, Sala A CPE 117/2014, Rta.: 6-12-2018 al analizar la ley 27.260).

Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que el crédito exteriorizado, cuyo origen es el contrato de cesión de cartera de clientes con asistencia financiera firmado entre Capseg SRL y Güemes Seguridad SRL firmado el 3 de abril de 2023, no puede, en principio, vincularse a los hechos objeto de esta causa, toda vez que conforme se desprende del artículo V, los cheques entregados como ayuda financiera serían el resultado de la contraprestación correspondiente a servicios previamente prestados por CAPSEG SRL a sus clientes, no advirtiéndose con la sola alegación la vinculación con los hechos ventilados en autos.

Fecha de firma: 18/12/2025

Firmado por: JUAN PABLO SALAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA ALEJANDRA LORENZ, PROSECRETARIO DE CAMARA



#39661410#485286450#20251218130505236

Así, entendiendo que la única limitación normativa para aplicar la extinción de la acción penal en los términos del Art. 59 del Código Penal, estaría dado en que los fondos estuvieran vinculados a los hechos investigados, corresponde revocar lo decidido en la instancia anterior, extinguir la acción penal y, en consecuencia, sobreseer al encausado.

Por todo ello, el Tribunal **RESUELVE:**

I. DISPONER la acumulación formal de los legajos FSM 1305/2024/1/1/CA1 y la FSM 15036/2022/3/CA3 a la presente FSM 15036/2022/4/CA4.

II. REVOCAR el punto dispositivo I de las resoluciones dictadas el 16 de mayo del cte. año en las causas FSM 1305/2024/1/1/CA1 y FSM 15036/2022/4/CA4 y **DECLARAR la INCONSTITUCIONALIDAD** en la presente causa del Art. 3, segundo párrafo, del decreto 773/24, en cuanto dispone que no se encuentran alcanzados por la liberación contemplada en el inciso b del Art. 34 de la ley, el gasto computado en el impuesto a las ganancias y el crédito fiscal del impuesto al valor agregado proveniente de facturas consideradas apócrifas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

III. REVOCAR el punto dispositivo II de la resolución del 16 de mayo pasado en los autos FSM 1305/2024/1/1/CA1 y lo resuelto en la misma fecha en la causa FSM 15036/2022/3/CA3 Y **DECLARAR** extinguida la acción penal por los delitos de evasión fiscal por parte del contribuyente CAPSEG SRL, respecto del pago al impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2016 por la suma de \$11.377.375,10, 2017 por \$22.979.624,61 y 2019 por \$20.675.816,35 y en el Impuesto al Valor Agregado período fiscal 2017 por la suma de \$13.673.320,03, 2016 por \$ 6.828.425,06 y 2019 por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL Nº 1

FSM 15036/2022/4/CA4, Incidente Nº 4 - DENUNCIADO:
CAPSEG S.R.L. Y OTRO s/INCONSTITUCIONALIDAD,
(Juzgado Federal Nº2, Secretaría Nº8, de Morón).
Registro de Cámara: 14.626

\$14.962.140,85 y del delito de simulación dolosa de pago, en virtud de las compensaciones solicitadas en el año 2016 por el monto de \$ 1.500.766,43, en el año 2017 por \$ 3.856.826,63, en 2018 por \$ 3.563.185,81 y en 2019 por \$ 801.797,58 -Art. 34 inc. b de la ley 27443-.

IV. SOBRESEER a ANTONIO BOBADILLA, identificado mediante DNI 20.337.202, nacido el 26 de enero de 1968, de nacionalidad argentina, domiciliado en el Kilómetro 69 ruta 2 Colonia Pastoril Formosa en orden a los delitos por los que fuera imputado en la causa FSM 15036/2022 del Juzgado Federal nº 2 de Morón, Sec. Nº 8, a la que se acumulara la causa FSM 1305/2024 originaria del Juzgado Federal nº3 de Morón Sec. Nº 11 (Art. 336, inc. 1º del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la CSJN (Acordada 10/2025 de la CSJN y ley 26.856) y devuélvase.

MARCOS MORAN
JUEZ DE CAMARA



MARCELO DARIO
FERNANDEZ
JUEZ DE CAMARA

JUAN PABLO SALAS
JUEZ DE CAMARA

MARIA ALEJANDRA
LORENZ
PROSECRETARIO DE
CAMARA

